LITORALPRESS

Fecha: 25-02-2024
Medio: El Mercurio de Valparaíso
Supl. : El Mercurio de Valparaiso
Tipo: Noticia general
Título: **Inseguridad rampante: ¿Quién será el próximo?**

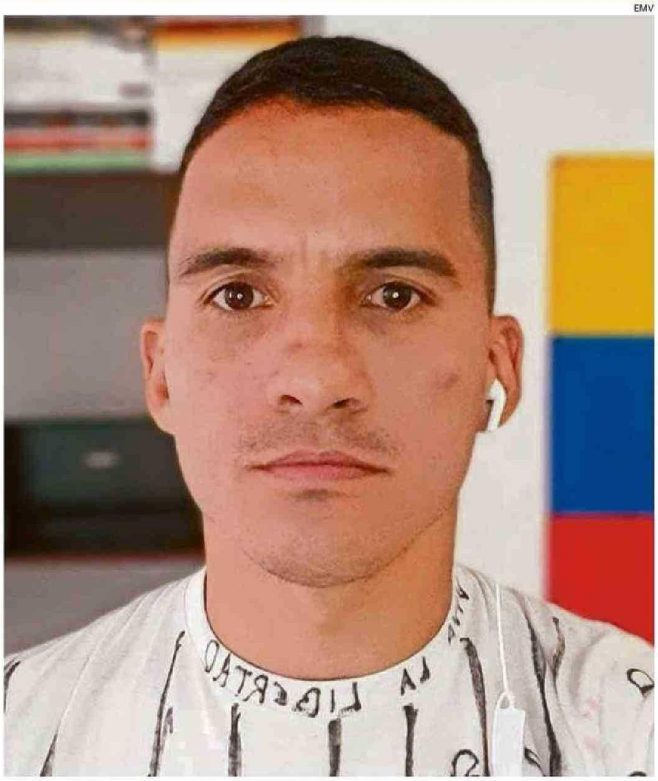
Pág. : 24
Cm2: 678,7
VPE: $ 1.632.224

Tiraje: 11.000
Lectoría: 33.000
Favorabilidad: No Definida

Inseguridad rampante: ¿Quién será el próximo?

POR ROBERTO AMPUERO
ESCRITOR, EXCANCILLER, EXMINISTRO
DE CULTURA Y EXEMBAJADOR
EN ESPAÑA Y MÉXICO

EMV



El secuestro del ex teniente venezolano Ronald Ojeda es gravísimo, entre otras razones, porque parece haber sido perpetrado por tropas especiales foráneas, que dejan en evidencia la desprotección en que vivimos. La operación -calcada de la que sufrió en Colombia otro ex militar venezolano a manos de la dictadura de Maduro, la que lo encerró en un centro de torturas, según sus padres- ocurre cuando continúa la inmigración ilegal, La Moneda se ve desbordada por varios frentes y en el congreso no nace una agencia de inteligencia acorde con las necesidades del país.

"No excluimos ninguna hipótesis", dice el gobierno, algo que hasta el ser más aislado del planeta puede sostener sobre cualquier tema sin temor a errar. Hay algo adicional que intuimos: si no se logra liberar a Ojeda ni esclarecer su secuestro pasaremos a una fase en la que -por nuestras debilidades institucionales y de conducción nacional- las víctimas mañana pueden ser congresistas, jueces, ministros, empresarios o líderes de opinión. No margino a nadie: la angustia de ser asaltado, secuestrado o asesinado ya la sufre la mayoría, y en especial los más vulnerables.

En este marco, la dictadura de Maduro aparece como el principal sospechoso del secuestro, algo que un estado de derecho debe acreditar, desde luego, aunque lo crucial de las fuerzas de élite es que operan sin dejar rastro. La irónica respuesta sobre el secuestro dice mucho y vino del número dos del régimen, diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del partido socialista: "Es que somos unos campeones". En 2023 Cabello calificó al presidente Boric de "bobo", "cachorrillo del imperialismo" y "disfrazado de izquierdista". Si así trata a un mandatario extranjero, podemos imaginar cómo lo hará con un teniente prisionero y acusado de "traición".

Los servicios de inteligencia de dictaduras interactúan con el crimen organizado y el narco. La evidencia es pública: el "caso del general cubano Ochoa", en 1989, que involucró espionaje, contrabando de armas, marfil y cocaína con Pablo Escobar, obligó a Fidel Castro a fusilar o encarcelar a militares y espías, sobre lo que circulan versiones siniestras. Figura también el "Cartel de los Soles", en que oficiales militares y del espionaje venezolanos están vinculados con el tráfico de estupefacientes, según la DEA; y también aparece la narcoguerrilla colombiana del ELN, que cubre con manto ideológico el control de territorios colombianos y venezolanos cruciales para el tráfico de cocaína. El régimen empleó en 2014 y 2017 enjambres de motos con dos ocupantes armados que sembraban el terror entre los manifestantes antimaduristas. Los moto-represores a chorro desaparecieron por arte de magia en un momento. Tampoco deben olvidarse los secuestros y asesinatos en Occidente, durante la Guerra Fría, de desertores del comunismo. Los servicios más temidos entonces eran el búlgaro, el soviético y el germano-oriental.

Un país abierto como el nuestro, que basa su desarrollo en el comercio internacional y debe ofrecer seguridad para que éste prospere, necesita una agencia de inteligencia eficaz y que no se limite a analizar información abierta. La agencia no avanza en el Congreso porque sectores de izquierda siguen asociando esos instrumentos, propios de democracias sólidas, con represión. Lo curioso es que son los mismos que han celebrado o celebran a los regímenes de La Habana y Caracas, o sienten nostalgia por los extintos estados comunistas y su férreo control ciudadano.

En resumen: Sólo sabemos que tenemos a millares de ilegales de los cuales nada sabemos. Urge separar los que entraron al país respetando las leyes de quienes lo hicieron violándolas, y no prejuiciar a grupos enteros. Australia y Canadá, liberales en inmigración, disponen de normas y procesos de selección rigurosos y ajustados a las necesidades del país. Los interesados postulan desde el exterior. Pero en todo el mundo, dada la magnitud del problema migratorio, se van cerrando las puertas bajo la consigna: "No podemos albergar a todo el que lo necesite". La premisa: fronteras seguras.

Las dictaduras izquierdistas de la región tienen otra característica: aprovechan las emigraciones para abrir cárceles y siquiátricos bajo la condición de que sus ocupantes emigren. Así fue en el éxodo por el Mariel cubano, en 1980, reflejado por el film Caracortada, con Al Pacino. Es un esquema cruel: oleadas migratorias infiltradas por delincuentes y agentes que desprestigian a los emigrantes donde lleguen, los mismos que trabajan duro para enviar remesas a sus familiares. En Cuba las remesas son el segundo mayor ingreso nacional, y la siguen denigrando como "la mafia de Miami". Muchos de los 7,8 millones de emigrados venezolanos envían remesas a los suyos. Chile (con 450.000) es el quinto mayor receptor de venezolanos, detrás de Perú (1,5 millones), Brasil (511.000) y Ecuador (500.000), ninguno de los cuales donó en 2019 alimentos en Cúcuta; y lejos de Colombia (2,8 millones), vecina de Maduro. En 2019 la emigración venezolana total ascendía a 2,9 millones, y tras la agudización de la crisis económica y la falta de perspectivas democráticas se disparó, y hoy alcanza a un cuarto de la población. Si Maduro sigue empeñado en inhabilitar la candidatura de Corina Machado, la favorita, y las elecciones anunciadas se vuelvan otra farsa, la emigración venezolana volverá a desatarse con graves consecuencias para toda la región.

El cuadro que pone en evidencia el secuestro de Ronald Ojeda es otro campanazo para Chile. Boric debe tomar conciencia del drama del país, debe intensificar los esfuerzos para liberar al ex teniente, impulsar la creación de una maciza agencia de inteligencia y buscar la unidad nacional para adoptar las medidas que permitan, en el marco del estado de derecho, derrotar la inseguridad que nos asfixia. Si el país sigue como va y vuelve a aumentar la emigración venezolana, la situación en Chile se volverá simplemente insostenible.